**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 95
O R D I N A R I A**

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del martes once de septiembre de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza. Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número noventa y cuatro, ordinaria, celebrada el lunes diez de septiembre de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el once de septiembre de dos mil doce:

II. 1. 252/2012

Amparo en revisión 252/2012 promovido por ***** contra el acto del Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, consistente en el auto de formal prisión de 17 de mayo de 2011, dictado en la causa penal 88/2011. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , en contra de los actos y autoridad señalados en el resultando primero, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria”*.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando sexto “Estudio de la competencia”.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en dicho considerando se determina que la competencia del Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, no puede sustentarse en el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, pues conforme al artículo 13 constitucional, dicho fuero subsiste para delitos cometidos por un militar, pero siempre que atenten contra la disciplina militar, es decir, no basta que se trate de un delito del fuero común cometido por

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

un militar, sino que es necesario que tal delito atente contra la disciplina militar para que se actualice la competencia de la jurisdicción militar, pues de no darse tal supuesto, deberá ser la jurisdicción ordinaria la competente en términos del artículo 13 constitucional.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que el delito se cometió por un militar en activo por los mismos argumentos que ha vertido en los precedentes anteriores, de tal manera que el sujeto que originalmente se desempeñaba como policía militar además, estaba en activo en el momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan.

Se manifestó en contra del proyecto en cuanto a que la determinación de la competencia deba sustentarse en lo que la propuesta denomina el “bien jurídico protegido” ya que sostuvo que éste guarda relación con la configuración del delito mismo.

Señaló que en este caso, el delito se relaciona con la correcta administración de justicia y, además, existe en todos los códigos ordinarios de la República, así como también en el Federal y en el Castrense.

Precisó que conforme al artículo 13 constitucional, el sujeto sí es determinante para la competencia que deba conocer, además de que el delito o falta del orden militar no deja de ser de este orden, sino que deja de ser conocido por un tribunal militar para serlo entonces por un juez del orden civil u ordinario, de tal manera que consideró que la

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

competencia no tiene que ver con el bien jurídico protegido, sino con el sujeto y, por ende, cuando el sujeto civil está involucrado o complicado en un delito del orden militar como sujeto activo o pasivo, será competencia de la autoridad civil que corresponda.

Manifestó que tratándose del delito en contra de la administración de justicia no podría considerar que está involucrado un civil pues se trata de un delito relacionado con la sociedad o con el Estado en general, por lo que no puede hablarse de un civil como víctima directa, de tal manera que señaló que pertenece a la esfera de la justicia militar.

En relación con el supuesto hecho de que se colocaron cartuchos en el vehículo que el civil conducía, estimó que podría considerarse colateralmente como la participación de un civil; sin embargo, consideró que se trata de un delito contra la administración de justicia previsto en el Código de Justicia Militar que no involucra a ninguna otra persona como víctima, por lo que su competencia corresponde a un juez militar.

El señor Ministro Presidente Silva Meza recordó que en el presente considerando se pretende determinar la jurisdicción que conocerá de los hechos. Asimismo señaló que el proyecto busca darle contenido al artículo 13 constitucional y recordó las votaciones obtenidas respecto de los considerandos anteriores en el sentido de que no se

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

favorece al fuero militar sino a la naturaleza de los hechos y de los delitos caracterizados en la formal prisión, lo que implica la no afectación de derechos humanos de civiles, ni de delitos contra la disciplina militar estrictamente, así como la interpretación del artículo 13 constitucional.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que conforme a lo resuelto en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ***** , se trata de un asunto del fuero civil y específicamente del orden local, pues el sujeto cometió los hechos delictivos fuera de los recintos referidos en el artículo 129 constitucional y se trata de un militar en servicio, además de que el delito se cometió expresamente en contra de la administración de justicia local, por lo que se manifestó en contra del sentido del proyecto y consideró que el asunto debía remitirse al Tribunal Colegiado para que estudie los agravios correspondientes.

El señor Ministro Valls Hernández indicó que aunque el delito se cometió por un miembro del ejército, esto no implica que se trate de un delito del orden militar al no afectar bienes jurídicos de la esfera castrense, sino que se trata de un delito contra la administración y la procuración de justicia, por lo que se manifestó en el sentido del proyecto, de acuerdo con lo resuelto en el expediente varios 912/2010 así como con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ***** .

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

Agregó que el debido proceso no sólo garantiza los derechos de los militares tratándose de delitos del orden común, sino los de todas las partes involucradas en el mismo.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que en casos anteriores ha sostenido que la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el artículo 13 constitucional, así como el análisis de convencionalidad en relación con el artículo 57 del Código de Justicia Militar, adquieren sentido en la medida en que existan víctimas civiles afectadas en sus derechos, por lo que estimó indispensable la existencia de una víctima civil para justificar la restricción al fuero militar.

Consideró que en el caso, la comisión que desempeñaba el militar en activo como policía del Estado de Nuevo León no altera su calidad, por lo que estimó que opera la restricción al fuero militar y, por ende, se justifica la remisión del asunto a la jurisdicción civil, tomando en cuenta que además, si bien es cierto que los delitos se refieren a la procuración y administración de justicia y no tienen formalmente una víctima directamente relacionada con estas conductas ilícitas, también lo es que en los hechos resulta una afectación para un individuo identificado en sus derechos.

Indicó los antecedentes del asunto y sostuvo que aunque el delito de homicidio no es motivo de la causa penal

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

sino sólo los delitos contra la procuración y administración, lo cierto es que esas conductas tienen una afectación directa a los derechos humanos de una víctima civil cuyos derechos fueron afectados, por lo que justificó la restricción al fuero militar y la remisión del asunto al fuero civil.

Asimismo se manifestó en el sentido de que debe conocer del asunto un juez federal en materia penal porque el sujeto activo del delito es un militar en activo, es decir, un servidor público de la Federación y propuso que los efectos se adecuen a los precedentes anteriores.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con las argumentaciones del juez militar para declinar su competencia y consideró que no siendo un asunto del fuero militar, debía definirse si se trata del fuero federal o del local, ante lo cual sostuvo que el asunto corresponde al ámbito local.

Precisó que tal como se hizo al resolverse el primer asunto, debe definirse cuándo un militar se encuentra en funciones, lo que es distinto a estar en activo.

Estimó que en el caso concreto, los militares debían “Desempeñar actividades propias de la estructura de seguridad pública en la citada Entidad Federativa... Durante las operaciones, dependerán administrativa y disciplinariamente de la Cuarta Región Militar y Séptima Zona Militar”, lo que no modifica la situación pues se trata de un conjunto de militares comisionados para realizar

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

actividades relacionadas con la seguridad pública en la entidad.

Asimismo, indicó que no se actualiza una falta o delito militar y que independientemente de que pudieran derivarse otros delitos, se dictó el auto de formal prisión sólo por delitos cometidos en la administración y procuración de justicia.

En ese orden de ideas, manifestó que de acuerdo con la postura que ha sostenido en los casos que los militares no están realizando funciones que deriven de su carácter de militares, sino de seguridad pública en un Estado, independientemente de otras condiciones y porque en el delito por el cual se acusa al sujeto activo no involucra en principio víctimas civiles, corresponde a la jurisdicción local penal conocer del asunto, por lo que se manifestó en el sentido de que no corresponde a la jurisdicción militar, sino a la civil, particularmente a la jurisdicción local.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que existe cosa juzgada en relación con la competencia ordenada por el Tribunal Colegiado en favor del juez militar.

Se manifestó en contra de la propuesta del proyecto, toda vez que no comparte la interpretación mayoritaria que se ha dado al artículo 13 constitucional, pues consideró que no se trata de las víctimas sino del copartícipe del delito, aunado a que no existen en el caso víctimas civiles.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó que debe determinarse con qué carácter se encontraban los elementos militares y precisó que en el oficio al que se hace alusión en el auto de formal prisión, emitido por el General de División Diplomado del Estado Mayor, se establece que los elementos fueron comisionados a determinadas labores de apoyo a la estructura pública del Estado de Nuevo León y que dependerán administrativa y disciplinariamente de la Cuarta Región Militar en Monterrey, Nuevo León, del Ejército Mexicano, por lo que se trata de militares en activo que se encontraban desempeñando un cargo público, por lo que se surte la competencia del fuero federal.

Consideró que el cumplimiento de las sentencias internacionales puede ser de variada índole y que las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprenden reparaciones como la restitución, la satisfacción, la rehabilitación, la no repetición y la indemnización; sin embargo, en el caso concreto, se tiene una obligación adicional de interpretar el artículo 13 constitucional para ser conforme con la Convención e inaplicar el precepto, para lo que la referida Corte Interamericana prevé la obligatoriedad del control difuso de convencionalidad de acuerdo a las atribuciones y facultades de cada uno de los juzgadores.

Agregó que el cumplimiento de la sentencia en sentido amplio se logra con la no aplicación del referido precepto constitucional y con la declaratoria de inconstitucionalidad

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

del precepto, toda vez que la obligatoriedad del Estado mexicano consiste en interpretar el artículo 13 en los términos que se ha hecho por este Alto Tribunal y, por ende, no aplicar la norma, lo que debe hacerse de forma flexible al promoverse un juicio de amparo en el que se reclame la inconstitucionalidad de una norma; en el caso de un amparo directo deberá inaplicarse; en tanto que en un juicio ordinario se inaplicará en el sentido del control de convencionalidad difuso que tienen los órganos jurisdiccionales al haberse establecido como obligatorias por este Alto Tribunal las resoluciones de este tipo.

Por ende, sostuvo que se está ante el cumplimiento de la sentencia, la cual puede tener distintas modalidades, por lo que no estimó determinante considerarlo como un presupuesto procesal o como una cuestión de inconvencionalidad y recordó su postura en el sentido de que no se puede hacer una separación entre la constitucionalidad y la convencionalidad en sentido fuerte y, menos aun, en este caso, porque el artículo 13 constitucional es acorde con la Convención Interamericana de Derechos Humanos siempre que se interprete conforme a los criterios de la Corte Interamericana, máxime que la Constitución otorga a los derechos humanos de índole internacional un rango constitucional, por lo que sostuvo que si se viola un derecho humano de índole internacional se viola también la Constitución.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que en estas participaciones se ha hecho referencia a los considerandos sexto y séptimo.

Indicó que la propuesta del considerando sexto consiste en que la competencia para conocer de estos hechos se surte en la justicia civil ordinaria; mientras que la propuesta del diverso séptimo consiste en que el competente es el juez penal federal; en tanto que la naturaleza de las funciones y la forma de la comisión que tenía el quejoso, las llevó a cabo con motivo de sus funciones como servidor público federal.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó interrogantes respecto de si se trataba o no de un involucramiento de un civil en el asunto. Precisó que al resolverse diverso conflicto competencial sostuvo que aunque directamente civil no estaba involucrado en el delito que se había cometido por un militar, en esa ocasión sí se podía considerar que estaban afectados los derechos de civiles y, por ende, debía corresponder el delito a la justicia ordinaria, por lo que reiteró la postura que mantuvo al resolverse el referido asunto.

Por tanto, estimó que aunque se trata de un delito cometido por un militar en activo; sin embargo, también se encuentran involucrados indirectamente derechos de civiles y, por ende, el asunto debe conocerse por la justicia ordinaria.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que se votarán separadamente los considerandos sexto y séptimo aun cuando el pronunciamiento ha sido conjunto.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que varios señores Ministros se han pronunciado en el sentido de que el asunto no corresponde al fuero militar; sin embargo, algunos se han pronunciado respecto de que no siendo del fuero militar, corresponde al fuero local y no al fuero federal, en tanto que la propuesta del proyecto consiste en que corresponde conocer del asunto a un juez federal.

Sometida a votación la propuesta del considerando sexto del proyecto consistente en que corresponde conocer del asunto a la jurisdicción ordinaria, se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, en contra de las consideraciones; Franco González Salas, con salvedades; Zaldívar Lelo de Larrea; Pardo Rebolledo, con salvedades; Aguilar Morales, con salvedades; Valls Hernández; Sánchez Cordero; Ortiz Mayagoitia, con salvedades y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Aguirre Anguiano y Luna Ramos votaron en contra.

Sometida a votación la propuesta del considerando séptimo del proyecto consistente en que corresponde conocer de los hechos a un juez penal federal, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

Mayagoitia y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz y Franco González Salas votaron en contra, en tanto que la señora Ministra Luna Ramos no se manifestó respecto de este tema, pues consideró que se trata de un asunto del fuero militar.

Por ende, los puntos resolutiveos se aprobaron por unanimidad de votos en los siguientes términos:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege, en contra de los actos y autoridad señalados en el resultando primero, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando octavo “Efectos”.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero precisó que los efectos de la sentencia se ajustarán a los precedentes resueltos por este Tribunal Pleno.

El señor Ministro Valls Hernández indicó que aun cuando en el presente asunto el auto de formal prisión no fue dictado por el juez militar, derivado de la resolución del conflicto competencial el juez militar asumió el conocimiento de la causa penal, por lo que estimó que debe ordenarse que se reoriente la vía a la jurisdicción ordinaria federal y se deje sin efectos lo actuado con motivo de la jurisdicción militar; sin embargo, por excepción deberá resolver la

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

situación jurídica del inculpado por tratarse de una medida de carácter urgente que no puede admitir demora, en términos de lo previsto en el artículo 19 constitucional y en el diverso aplicable del Código Federal de Procedimientos Penales, para posteriormente declinar competencia al juez de Distrito de Procesos Penales Federales en turno para que conozca de la causa.

Los señores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas consideraron que el asunto debía remitirse al Tribunal Colegiado para que analice los agravios de legalidad, por lo que se manifestaron en contra de la propuesta.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos y Franco González Salas votaron en contra.

Por unanimidad de votos, se aprobó que las votaciones obtenidas en este asunto sean definitivas, con la salvedad de la votación del señor Ministro Aguirre Anguiano relativa al considerando séptimo en la que modificó su voto para manifestarse en contra de la propuesta.

El señor Ministro Valls Hernández precisó que los efectos a que se refirió no necesariamente coinciden con la

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

propuesta del proyecto, por lo que reservó su derecho para formular, en su caso, voto concurrente.

Los señores Ministros reservaron su derecho para formular sendos votos particulares y concurrentes.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 2. 224/2012

Amparo en revisión 224/2012 promovido por ***** contra el acto del Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, consistente en el auto de formal prisión de 9 de diciembre de 2010, dictado en la causa penal 1196/2010. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se propuso: *“ÚNICO. Devuélvase los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, para los efectos del último considerando de esta ejecutoria”*.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano expuso los antecedentes y una síntesis de las consideraciones de su proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”; segundo “Oportunidad del recurso”; y tercero “Agravios”, los que se aprobaron por unanimidad de votos.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando cuarto “Consideración previa” y recordó que en el proyecto se alude a la suplencia de la queja, tal como se resolvió favorablemente en el precedente 770/2012.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó a favor del sentido del proyecto pero en contra de las consideraciones relacionadas con la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el asunto varios 912/2010 y en la sentencia del caso ***** de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los señores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas se manifestaron en el mismo sentido dado que el tema debe abordarse en cumplimiento directo de la referida sentencia. La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra de este considerando.

El señor Ministro Aguirre Anguiano recordó que en el citado asunto varios no se dictó sentencia alguna.

Sometida a votación económica la propuesta del considerando cuarto del proyecto se aprobó por mayoría de diez votos con salvedades de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas y Valls Hernández. La señora Ministra Luna Ramos voto en contra.

El señor Ministro Aguilar Morales recordó que en el referido precedente votó en contra, pero se manifestó a favor

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

de la propuesta de este considerando porque la decisión mayoritaria consistió en que se atrajera el asunto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando quinto “Competencia del Juez Militar”.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano precisó que en dicho considerando se determina que en el caso no se encuentran involucrados civiles ni se comprometen sus derechos humanos para que pudiera restringirse en este caso el fuero militar. Agregó que el proyecto es acorde con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 57 del Código de Justicia Militar, pues se concluye que el juez militar, adscrito a la Tercera Región Militar que dictó el auto de formal prisión de nueve de diciembre de dos mil diez, señalado como acto reclamado, es competente para conocer causa penal 1196/2010.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra de la propuesta conforme al argumento que ha sostenido relativo al artículo 129 constitucional. Además, consideró que debía agregarse a la sentencia un resolutive tercero en el que se declare la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 57 del Código Castrense en cumplimiento de la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó en contra de la propuesta pues sostuvo que el criterio determinante para que una causa penal sea o no del conocimiento de la jurisdicción militar, consiste en que el delito o falta se cometa por elementos de las fuerzas armadas en activo, que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Por ende, aun cuando la conducta constitutiva del delito fue cometida por un miembro del Ejército, no es un delito del orden militar o que por su propia naturaleza afecte bienes jurídicos propios de la esfera castrense que tutelen intereses jurídicos de la disciplina militar, sino un delito contra la salud que afecta bienes jurídicos propios del régimen ordinario cuya tutela interesa a la sociedad e indicó que la causa penal de origen también involucra el delito tipificado como infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército en su modalidad de que quien sobre cualquier asunto del servicio dé a sus superiores por escrito o de palabra, informe o parte contraria a lo que sabía, lo que no tiene una naturaleza autónoma, ya que es el medio utilizado para cometer el delito contra la salud en la modalidad de colaboración para fomentar el cultivo y cosecha de marihuana, por lo que debe entenderse subsumido en éste y, por ende, sostuvo que el juez militar no es competente para conocer de la causa penal.

La señora Ministra Sánchez Cordero estimó que la competencia del fuero ordinario civil no debe surtirse por la

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

conurrencia o no de militares con civiles, sino por el bien jurídico tutelado.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que este asunto es competencia de la justicia militar pues se cometió por un militar y atenta contra la justicia militar, sin que se involucren víctimas civiles.

Se manifestó en contra del tratamiento del proyecto ya que si bien en la página cincuenta y cinco se señala que los requisitos o condiciones para restringir el fuero consisten en que en los asuntos se encuentren involucrados militares y civiles o que esté comprometido el respeto a los derechos humanos de los civiles involucrados, estableciendo ahí el parámetro del sujeto afectado y que es el que debe determinar si existe o no la competencia civil o la ordinaria, en la diversa cincuenta y ocho se sostiene que debe también desentrañarse la naturaleza del bien jurídico tutelado y los argumentos que se hacen valer en relación con si el delito introduce, o vigila, o considera un bien jurídico tutelado, harían que se tuviera que determinar, en todo caso, la invalidez o la inconstitucionalidad del artículo que prevé ese delito, pues parecería que se está calificando la naturaleza del delito como si éste no fuera militar, por lo que se apartó de esta propuesta, ya que consideró que se trata de una condición de validez o constitucionalidad del delito en sí mismo.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor de la propuesta del considerando por razones similares a las indicadas por el señor Ministro Aguilar Morales, pues se trata de un militar en servicio estrictamente cumpliendo con determinadas instrucciones al que se le imputan delitos del orden castrense sin que estén civiles involucrados.

Señaló que las conductas calificadas como antisociales por el legislador, son atentatorias contra la sociedad y consideró que en el caso concreto se surte la jurisdicción militar, por lo que debe ser la jurisdicción castrense la que conozca del asunto.

Consideró que las precisiones que tiene sobre el considerando no requieren ser analizadas en este momento, por lo que reservó su derecho para formular voto concurrente.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia consideró que la imputación que se hace en este asunto al sujeto activo es estrictamente militar, sin que implique un delito contra la salud, por lo que en el auto de formal prisión transcrito en la página sesenta y dos del proyecto se señala que el sujeto permitió el cultivo y la cosecha de marihuana, sin haber participado en las actividades del delito contra la salud, además de que no se encuentra involucrado ningún civil.

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

Por ende, estimó que este asunto no guarda relación con el caso ***** pues no existen víctimas u ofendidos civiles.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en el caso se declaró la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de delitos de infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército conforme a lo previsto en el artículo 343, fracción I, del Código de Justicia Militar; sin embargo, también se declaró su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de colaboración en el fomento para posibilitar el cultivo y cosecha de marihuana, previsto y sancionado en los artículos 194, fracción III y 196, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que se trata de dos imputaciones distintas, ante lo cual, el señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que sólo se le estima responsable del delito contra la salud.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra de la propuesta pues conforme al asunto varios 912/2010, el fuero militar que establece el artículo 13 constitucional debe ser interpretado restrictivamente como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que se reserva exclusivamente para los delitos cometidos por militares que afectan la disciplina militar, por lo cual, los delitos en los que las víctimas sean civiles, serán de la jurisdicción ordinaria o civil, como también lo serán

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

aquellos cometidos por un militar que no sean de la estricta disciplina militar.

Estimó que toda vez que al inculpado se le imputan dos delitos, uno por disciplina militar derivado de la infracción de los deberes comunes a aquellos que están obligados a servir en el ejército y otro, el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar el cultivo y cosecha de marihuana, la jurisdicción debe surtirse al fuero común y consideró que el artículo 57, fracción I, del Código de Justicia Militar, es contrario al artículo 13 constitucional y a la Convención Americana de Derechos Humanos pues de lo contrario, se estaría extendiendo a través de un subterfugio, la jurisdicción militar a cierto tipo de delitos para los cuales no está establecido este fuero.

A las trece horas el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con veinte minutos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó a favor de la propuesta y precisó que se trata de una conducta realizada por un militar en servicio y las conductas implicadas se encuentran contenidas en el Código de Justicia Militar, por lo que se actualiza lo previsto en la fracción I del artículo 57 del Código de Justicia Militar; sin embargo, respecto del delito contra la salud, indicó que si bien es cierto que podría hacerse referencia a la diversa

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

fracción II, lo cierto es que no existe afectación a los derechos humanos de alguna víctima civil.

En relación con la propuesta consistente en la devolución del asunto al Tribunal Colegiado porque el Tribunal Pleno sólo debe pronunciarse respecto de la restricción o no al fuero militar, indicó que aun cuando se argumenta la incompetencia de este Alto Tribunal, tratándose de una facultad de atracción, éste cuenta con competencia para resolver todos los aspectos, incluso los de legalidad, por lo que propuso que se devolvieran los autos al Tribunal de origen para el efecto de que aquél se ocupara de los agravios que hizo valer el quejoso en su amparo.

El señor Ministro Aguirre Anguiano se manifestó de acuerdo con la propuesta del señor Ministro Pardo Rebolledo.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que desde el inicio se opuso a la atracción del asunto pues consideró que se trata de delitos del fuero militar; sin embargo, conforme a la decisión mayoritaria de atraer el asunto para su análisis por el Tribunal Pleno, se manifestó con el sentido en esta parte del proyecto en la que concluye que no se trata de un delito del que deba de conocer la justicia civil sino el fuero militar y reservó su derecho para formular, en su caso, voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó a favor de la propuesta del señor Ministro Zaldívar Lelo de

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

Larrea en el sentido de que se surte la competencia del orden civil.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto consistente en que en este asunto se surte la competencia del fuero militar, se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales y Ortiz Mayagoitia. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza votaron en contra.

Sometida a votación la propuesta consistente en devolver los autos al Tribunal Colegiado respectivo, se aprobó, en votación económica, por unanimidad de votos.

Por unanimidad de votos se acordó que las votaciones obtenidas en este asunto tendrán el carácter de definitivas.

Por ende, el punto resolutivo se aprobó en los siguientes términos:

ÚNICO. Devuélvanse los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, para los efectos del último considerando de esta ejecutoria.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados e indicó que en estas sesiones se han abordado los asuntos con mayor

Sesión Pública Núm. 95 Martes 11 de septiembre de 2012

complejidad y mayores aristas respecto del fuero militar, por lo que con lo resuelto en ellos se sentarán criterios para remitir los asuntos restantes a la Primera Sala de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la próxima sesión se analice el último amparo directo en revisión de este paquete.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves trece de septiembre del presente año, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.